

dará publicarse, y será guardada en toda la monarquía como ley, abajo las penas que se establezcan.

NÚMERO 110.

Decreto de 22 de Febrero de 1813. — Por el que se manda quitar de los parages públicos, y destruir las pinturas ó inscripciones de los castigos impuestos por la Inquisición.

Las Cortes generales y extraordinarias, atendiendo á que por el artículo 305 de la constitución, ninguna pena que se imponga, por cualquier delito que sea, ha de ser trascendental á la familia del que la sufre; sinó que tendrá todo su efecto sobre el que la incurre; y á que los medios con que se conserva en los parages públicos la memoria de los castigos impuestos por la inquisición, irroga infamia á las familias de los que los sufrieron, y aun dan ocasión á que las personas del mismo apellido se vean espuestas á mala nota; han venido en decretar y decretan: Tólos los cuadros, pinturas ó inscripciones en que estén consignados los castigos y penas impuestos por la inquisición, que existan en las iglesias, claustros y conventos, ó en otro qualquier parage público de la monarquía, serán borrados ó quitados de los respectivos lugares en que se hallen colocados, y destruidos en el perentorio término de tres dias contados desde que se reciba el presente decreto.

NÚMERO 111.

Decreto de 22 de Febrero de 1813. — Se declaran nacionales los bienes que fueron de la inquisición: medidas sobre su ocupación, y sobre el sueldo y destino de los individuos de dicho tribunal.

leyes extraordinarias, se dirige á poner de boga á los bienes y derechos de la nación, y á proveer que se administren con la mayor economía y exactitud, evitando su malveración, á fin de que el producto de ellos se invierta en los grandes objetos de nuestra defensa y libertad, ó en otros fines de reconocida utilidad nacional, y que los pueblos no sufran mas sacrificios de impuestos y contribuciones que aquellos que sean absolutamente precisos. Con esta idea han decretado lo siguiente:

Art. I. Hallándose suprimidos los tribunales de la inquisición en toda la monarquía española desde el 26 de Enero último, en que las Cortes generales y extraordinarias decretaron el restablecimiento de la ley II, título XXXVI de la Partida VII, en quanto deja expeditas las facultades de los obispos y sus vicarios para conocer en las causas de fe, con arreglo á los sagrados cánones y derecho comun, quedaron vacantes los bienes, así muebles, como raíces ó semovientes, los derechos y acciones, los patronatos, censos, y otras cualesquiera prestaciones pertenecientes á la inquisición, ora estén poseídas ó solamente demandadas.

II. Desde dicho dia en adelante pertenecen á la nación estos bienes, en los mismos términos ó igual derecho que la inquisición los poseía, disfrutaba ó demandaba.

III. Así como el estado se subroga á la inquisición en el dominio y posesion de todos estos bienes, derechos y acciones, del mismo modo reconocerá como propias las obligaciones á que estuvieren afectos, y las cumplirá ó hará cumplir puntualmente, aun cuando su valor no alcance á cubrir las todas.

IV. Toda enajenacion ó venta de los expresados bienes y derechos que se hubiere hecho desde el citado dia 26 de Enero, ó las que en adelante puedan hacerse por cuerpos ó personas distintas de las que el gobierno depute y autorice competentes, á este fin, serán reputadas como